

CAPÍTULO 8

LAS DIMENSIONES DE LA EXPERIENCIA PIQUETERA¹⁸

Sólo el voluntarismo universalista de un movimiento social capaz de superar los límites de las organizaciones tradicionales, en especial integrando plenamente el movimiento de desocupados, estaría en condiciones de combatir y contrarrestar los poderes económicos y financieros sobre el lugar mismo, de ahora en más internacional, de su ejercicio.

Pierre Bourdieu,
"Contre-feux (2001) Pour un mouvement social européen".

LAS CONDICIONES DE EMERGENCIA DE LAS ORGANIZACIONES DE DESOCUPADOS

Históricamente, la emergencia y el desarrollo de un movimiento social de desocupados no ha aparecido como algo necesario ni evidente, ni mucho menos sostenido en el tiempo. La literatura sociológica ha insistido, más bien, en el conjunto de dificultades, tanto de carácter objetivo como subjetivo, que caracteriza la acción de los desocupados y que impide que éstos se conviertan en un verdadero actor colectivo. A la problemática vinculada con el hecho de que los desocupados se hallan "fuera" de la estructura social, que no ocupan "ningún lugar", que son por ello "irrepresentables", muchos añaden la heterogeneidad de las bases y de las trayectorias sociales.

La crisis de los años 30 generó una amplia ola de desocupación que afectó a todos los países, sin excepción. Como consecuencia de esta primera ola de hiperdesempleo, surgieron diferentes movimientos y sindicatos de desocupados, tanto en Estados Unidos como en Europa. Sin embargo, esta primera gran crisis desembocó en la intervención social del Estado y, posteriormente, en el desarrollo de economías de bienestar que lograron absorber e integrar gran parte de la masa de desempleados. En la actualidad, en la medida en que la desocupación se ha convertido en un rasgo estructural del modelo posfordista, visible en la

existencia de un número importante —aunque variable, según los países— de desempleados, son muchas las sociedades que han profundizado una política de control del desempleo, por medio de agencias de empadronamiento, seguros de desempleo, centros de formación y de reinserción. Aquellos países centrales que cuentan con una experiencia en este campo, avallada por una política de Estado, han buscado desarrollar una red de contención del desempleo, que han ido ajustando durante la crisis de los años 80 y 90. Por otro lado, no es menos cierto que en otras latitudes, la desocupación, como problemática —y más allá de las dificultades de su tematización, y del efectivo surgimiento de nuevas organizaciones— ha sido por lo general integrada en la plataforma de demanda de los grandes sindicatos o centrales de trabajadores.

En otros capítulos hemos destacado que, durante décadas, la sociedad argentina, más allá de las asimetrías regionales, registraba una tendencia a la integración social. En realidad, hasta no hace mucho tiempo, la Argentina fue uno de los pocos países latinoamericanos donde aquello que algunos estudiosos han dado en llamar “sociedad salarial” (Castel:1995) tuvo un desarrollo importante —sobre todo en los polos industriales—, aun si éste no podría ser asimilado al que conocieron ciertos países europeos. En líneas generales, esta integración se realizó en un contexto de pleno empleo, a través de un conjunto de instituciones que fue posibilitando la incorporación de un amplio sector de los trabajadores urbanos, en términos de derechos sociales, protección social y estabilidad laboral. De otro lado, esta cierta “excepcionalidad” argentina daba cuenta, también, del escaso desarrollo de redes de contención comunitarias, en comparación con otros países latinoamericanos, al tiempo que mostraba una expansión igualmente inferior del trabajo informal, como “actividad refugio”, asociado tradicionalmente con las estrategias de sobrevivencia.

Sin embargo, el proceso de reformas estructurales —que arranca en los 70 pero que encuentra su realización a partir de los 90— implicó el desmantelamiento de las estructuras de la sociedad salarial, desarrolladas por el modelo nacional-popular. Ya hemos señalado que lo vertiginoso de estas transformaciones se expresó por un inédito proceso de descolectiviza-

ción. Esto afectó tanto a las grandes zonas industriales como a las economías regionales y provinciales, y se aceleró aún más luego de 1995, enfrentándonos con lo considerado tradicionalmente como "lo irrepresentable": los desocupados. Ahora bien, la sociedad argentina no contaba con redes de contención ni con centros de formación o reconversión laboral, pero tampoco el Estado se propuso desarrollarlos cabalmente, a la hora de aplicar crudas medidas de flexibilización o despidos masivos. Ya hemos visto también que los sindicatos, nucleados en la otrora poderosa CGT, de filiación justicialista, no sólo no acompañaron a sus afiliados sino que avalaron el programa de reformas estructurales. Por último, el tejido comunitario de la sociedad argentina, pese a sus incipientes desarrollos desde la década de los 80, aparecía como insuficiente —y demasiado atravesado por los intereses del Partido Justicialista— para amortiguar el peso de tantas caídas.

Este conjunto de hechos y factores nos permite comenzar a responder por qué en la Argentina existe un movimiento de desocupados cuya expansión y relevancia lo ha llevado a erigirse en una suerte de caso único en el mundo. Pero esta tentativa de respuesta sería a todas luces insuficiente si no tuviéramos en cuenta que la emergencia de un movimiento de desocupados, con las características actuales —esto es, un conjunto de organizaciones "piqueteras"— se explica también por la existencia de una tradición política organizativa, en gran parte asociada a las vertientes más clasistas, cuyos militantes se decidieron a actuar y a construir por fuera de las estructuras sindicales vinculadas con el Partido Justicialista.

En lo que sigue, presentaremos los rasgos principales de la organización y movilización de desocupados. Para ello, dividiremos la presentación en tres partes. En la primera parte abordaremos los orígenes, así como las corrientes fundamentales que atraviesan el espacio de las organizaciones de desocupados. En la segunda, nos ocuparemos tanto de señalar las dimensiones de la heterogeneidad, como aquellos repertorios comunes que caracterizan la experiencia de las organizaciones piqueteras (la acción directa, la dinámica asamblearia, el trabajo comunitario). Este enfoque es crucial para entender el éxito organizativo de la experiencia piquetera frente a las dificultades que generalmen-

te supone la movilización de los desocupados. En la tercera parte, daremos cuenta de la conflictiva relación con el Estado y los diferentes posicionamientos políticos de las organizaciones.

EL DOBLE ORIGEN DEL MOVIMIENTO PIQUETERO

El movimiento piquetero nunca fue uno ni homogéneo, sino que estuvo marcado por diferentes tradiciones organizativas y corrientes político-ideológicas. En rigor, el proceso de conformación del movimiento piquetero reconoce dos afluentes fundamentales: por un lado, las acciones disruptivas, evanescentes y por momentos unificadoras, de los cortes de ruta y levantamientos populares registrados en el interior del país a partir de 1996, resultado de una nueva experiencia social comunitaria vinculada al colapso de las economías regionales y a la privatización acelerada de las empresas del Estado realizada en los años 90; por otro lado, la acción territorial y organizativa gestada en el Conurbano Bonaerense, y ligada a las lentas y profundas transformaciones del mundo popular, producto de un proceso de desindustrialización y empobrecimiento creciente de la sociedad argentina que arrancó en los años 70.

No es posible comprender la génesis ni el posterior desarrollo del movimiento piquetero si no establecemos esta doble filiación. Así, los conflictos generados en el interior del país representaron el punto inicial en el cual una nueva identidad —los piqueteros—, un nuevo formato de protesta —el corte de ruta—, una nueva modalidad organizativa —la asamblea— y un nuevo tipo de demanda —los planes sociales— quedaron asociados, originando una importante transformación en los repertorios de movilización de la sociedad argentina. En fin, la acción colectiva con epicentro en algunas regiones del Conurbano Bonaerense contribuyó de manera decisiva al desarrollo de los modelos de organización, a escala nacional, así como también a la producción de los nuevos modelos de militancia, íntimamente asociados al trabajo comunitario en los barrios.

Mientras que el primer afluente nos emplaza en la perspectiva de la ruptura, el segundo tiende a marcar la perspectiva de la continuidad. En realidad, podríamos decir que la acción pi-

quetera nació allí donde se desarticularon los marcos sociales y laborales de manera brusca y vertiginosa, allí donde la experiencia de la descolectivización adquirió un carácter masivo, afectando a trabajadores calificados que contaban con carreras laborales estables, e incluían familias y hasta generaciones completas socializadas en el marco de la estabilidad y el bienestar social; allí donde el desarraigo tanto como la desocupación reunieron en un solo haz un conglomerado heterogéneo de categorías sociales. Así, la cuna del movimiento piquetero se encuentra en las lejanas localidades petroleras, Cutral-Co y Plaza Huincul (1996-97), en Neuquén, y sobre todo, Mosconi y Tartagal, en Salta (a partir de 1997); esto es, poblaciones cuya vida estaba estructurada en torno de YPF, la mayor empresa productiva del Estado.

Los largos cortes de 1996 y 1997 ocurridos en Cutral-Co y Plaza Huincul (Neuquén) y en Tartagal y Mosconi (Salta) tuvieron una importancia fundamental porque, en primer lugar, marcaron el pasaje a la acción de nuevos actores constituidos en el interior del país, a saber: multisectoriales conformadas por sectores desigualmente afectados por la desestructuración de las economías locales. Fue sin duda el encuentro entre diferentes sectores sociales, todos ellos afectados por un inédito proceso de descolectivización, frente a un Estado nacional en retirada, lo que constituye el punto de partida de una experiencia unificadora, en medio del desarraigo social. Así, en esos cortes confluyeron desocupados, comerciantes, pequeños empresarios, sindicatos y políticos locales. Fue esa dimensión comunitaria la que posibilitó la convergencia entre los cortes —los piquetes— y las puebladas, herederas de los estallidos en las provincias, que se producirán como respuesta a las represiones de los piquetes, para luego constituirse de manera progresiva en horizontes potenciales de cada corte.

Sin embargo, puebladas y piquetes tuvieron una impronta fuertemente sindical relacionada, por un lado, con la constante movilización de los gremios de docentes y estatales en todo el país; y por otro lado, con el hecho de que varias líneas sindicales, opositoras al régimen de Menem —la CTA y la CCC— en la segunda mitad de los 90, decidieron volcarse progresivamente hacia la organización de desocupados —y levantar sus bande-

ras—, hecho que marcaría el salto hacia la masividad de las organizaciones piqueteras.

Ahora bien, a diferencia de las movilizaciones que se produjeron en las localidades o regiones afectadas por el proceso de privatización de las empresas del Estado y la descentralización administrativa, las acciones de protesta en el Conurbano Bonaerense, en Rosario o en Mar del Plata, se relacionan con un proceso económico y social de más largo plazo, ligado tanto a la desindustrialización como al lento y creciente deterioro de las condiciones de vida de las clases populares y las clases medias-bajas, que había arrancado a mediados de los 70.

Como ya hemos analizado en otro capítulo, una de las primeras consecuencias de esta inscripción territorial fue que el barrio emergió como el espacio natural de acción y organización, convirtiéndose en el lugar de interacción entre diferentes actores y organizaciones de base, comunidades eclesiales y, en algunos casos, de organizaciones no gubernamentales. En los años sucesivos, en la medida en que se fueron agravando las condiciones de vida de las clases populares y se acentuó la distancia con el mundo del trabajo formal, la militancia territorial fue revistiéndose de nuevas dimensiones. Las organizaciones de desocupados que ejemplifican cabalmente el modelo "territorial" de militancia y organización son la FTV, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR) y los diferentes MTD (Movimientos de Trabajadores Desocupados que durante un tiempo convergerían en la Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón), hoy reflejados en el MTD Aníbal Verón y el Frente Darío Santillán.

Así, en determinadas zonas del Conurbano Bonaerense y a diferencia del primer afluente —que expresa la convergencia entre "piquetes" y "puebladas"—, el segundo afluente inscribe la experiencia de las organizaciones de desocupados en un modelo de acción territorial que, en algunos casos, remite a una historia previa, ligada a la lucha por la propiedad de la tierra y a la organización de la vida del barrio alrededor de los servicios básicos (calles, agua, energía eléctrica, la sala de salud, entre otros).

Entre 1991 y 1997, en la medida en que el paisaje urbano iba perdiendo sus rasgos tradicionales, hasta convertirse en un verdadero cementerio de industrias y pequeños comercios, la

política en los barrios fue recluyéndose en su dimensión más reivindicativa, despojándose de sus lazos tanto con la militancia política como respecto del mundo sindical. Ya hemos dicho que las razones de tal inflexión son variadas y complejas: el telón de fondo es, sin duda, el triunfo del peronismo en su versión neoliberal y los cambios en la estrategia de intervención social del Estado y del Partido Justicialista respecto de los sectores populares (el pasaje de lo sindical a lo territorial y la despolitización de la militancia, concebida como un trabajo social —la “militancia social”—, por medio de una política social focalizada).

Sin embargo, fue la politización de una experiencia de trabajo barrial lo que constituyó el núcleo de la acción contestataria y, rápidamente, el punto de partida para la organización y la acción masiva. Ciertamente, a partir de 1996-1997, los piqueteros abrieron una brecha en el mundo descolectivizado del nuevo proletariado marginal, al cuestionar el clientelismo peronista, e introducir apelaciones a la dignidad, ligadas a la acción colectiva. En este sentido, la visibilidad que el trabajo territorial fue adquiriendo a través de las primeras ollas populares y cortes de ruta, pusieron al descubierto el alcance de las transformaciones y el empobrecimiento operados dentro del mundo popular. Las primeras definiciones marcaron a fuego no sólo el horizonte de las organizaciones sino más específicamente el estilo de intervención y la lógica de construcción política. Así, las organizaciones de desocupados, más allá de sus actuales alineamientos políticos y sindicales, reconocen como fuente originaria el “trabajo territorial”, asentado en un modelo de representación que algunos sintetizarán a partir de la figura del “delegado de base” y otros en la del “dirigente comunitario” o simplemente el “referente territorial”.

De esta manera, una parte de aquella Argentina sacrificada en nombre del modelo neoliberal e ignorada por los medios de comunicación, irrumpió en las rutas del país, impidiendo la libre circulación de personas y mercancías, en demanda de puestos de trabajo. De aquellos primeros cortes, protagonizados por los pobladores de comunidades enteras, surgió el nombre “piquetero” —aquel que organiza los piquetes, los cortes en las rutas—; nombre que, además de atraer la atención —de los medios y del sistema político— por su fuerza expresiva, representó

una alternativa para todos aquellos para los cuales ser definidos como "desocupados" les resultaba intolerable. Así comienza la historia de pequeñas organizaciones locales de desocupados que más tarde pasaron a integrar —la mayor parte de las veces— "federaciones" de escala nacional. Poco a poco, pese al déficit comunitario, la autoorganización compulsiva de lo social abrió las puertas a nuevas experiencias, asociadas a la vivencia del barrio, la ruta y la calle, lugares desde los cuales los individuos buscaron reconstruir su identidad y reencontrar su dignidad. La acción colectiva trajo así consigo la idea de que otra identidad —y otro destino— era posible para quienes habían perdido su trabajo y habían visto interrumpida su carrera laboral. Un nuevo motivo de dignidad —que reemplazaría entonces la perdida dignidad del trabajo— podía comenzar a buscarse explorando y explotando la categoría "piquetero" y enterrando la de "desocupado".

En resumen, la génesis del movimiento piquetero no se relaciona con un único proceso. El movimiento piquetero no es el producto exclusivo de los piquetes y puebladas que sacudieron a las lejanas provincias argentinas en los últimos años, pero tampoco brotó naturalmente de los asentamientos originados en los 80 en la provincia de Buenos Aires. Es la convergencia de estos dos afluentes lo que va a permitir la formación, la expansión y aun la posterior potenciación del movimiento piquetero. La confluencia entre, por un lado, acción disruptiva, dinámica asamblearia e identidad piquetera, originaria de los piquetes y puebladas del interior del país y, por otro lado, los modelos de organización y militancia territorial, desarrollados de manera paradigmática en determinadas regiones, sobre todo en La Matanza y el eje sur del conurbano bonaerense.

ORIENTACIONES Y FASES DEL MOVIMIENTO PIQUETERO

Las organizaciones de desocupados más importantes pueden comprenderse a partir de tres lógicas principales: una lógica sindical, una lógica político-partidaria y una lógica de acción territorial. En primer lugar, las formas de organización de los piqueteros reconocen una fuerte impronta sindical

marcada ya sea por la intervención directa de sindicatos en la organización de desocupados —como es el caso de la FTV, ligada a la Central de Trabajadores Argentinos— o, simplemente por la presencia de referentes que han tenido una trayectoria de militancia sindical.

En segundo lugar, los partidos políticos de izquierda que han aportado sus estructuras a los movimientos marcan la presencia de otra lógica distinta de organización. Así, el Polo Obrero (dependiente del Partido Obrero, de raíz trotskista), Barrios de Pie (Partido Patria Libre), Movimiento Territorial de Liberación (Partido Comunista Argentino) o el Movimiento Teresa Vive (ligado al trotskista Movimiento Socialista de los Trabajadores), representan ejemplos paradigmáticos en los cuales, la organización de desocupados es subsidiaria de sus orientaciones políticas. Aquí, la política en sentido institucional y electoral aparece como un objetivo claro a ser alcanzado.

En tercer lugar, muchas organizaciones piqueteras se generaron en torno de liderazgos de tipo barrial, en general también con antecedentes militantes, pero desvinculados de las lógicas sindical y partidaria. Por ejemplo, los Movimientos de Trabajadores Desocupados (MTD) que integraron hasta 2003 la Coordinadora Aníbal Verón o, incluso, los diferentes movimientos de desocupados que se conformaron en el interior del país —como la emblemática Unión de Trabajadores Desocupados (UTD) de General Mosconi en Salta— y que decidieron no integrar ninguna de las grandes corrientes de nivel nacional.

En muchos casos, las lógicas de construcción política aparecen fuertemente entremezcladas en las organizaciones. Tal es el caso de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), de origen sindical, al tiempo que la mayor parte de sus referentes son también militantes del Partido Comunista Revolucionario (PCR) de filiación maoísta. El Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), agupación independiente, de inspiración guevarista, o aun el controvertido Movimiento de Jubilados y Desocupados (MIJD), que exhibe un fuerte estilo movimientista, de gran exposición mediática, representan también casos en los cuales la lógica territorial y política aparecen entremezcladas y en tensión permanente.

Ahora bien, la expansión territorial y el reconocimiento de las organizaciones piqueteras como interlocutor político no

fueron fáciles. En primer lugar, las incipientes organizaciones piqueteras entablaron una relación conflictiva con el gobierno peronista de Menem y en muchos casos emergieron de una lucha "cuerpo a cuerpo" contra sus estructuras clientelares locales (entre 1996 y 1999); desarrollaron luego una vertiginosa autonomía durante el gobierno de De la Rúa, período en el cual se constituyeron en un verdadero movimiento social organizado (1999-2001); y fueron las protagonistas de las grandes movilizaciones de 2002, confirmando de esta manera su centralidad en el escenario político argentino, tanto durante el gobierno provisional de Eduardo Duhalde, como actualmente bajo la gestión de Kirchner (2003-), más allá de las divisiones y diferentes posicionamientos registrados en el último período.

A todo esto, la única política sistemática del Estado nacional para hacer frente a la progresiva crisis de empleo fue el lanzamiento, en 1996, del Plan Trabajar, política que mantuvo siempre (aun en su nueva formulación de 2002, el Plan Jefes y Jefas de Hogar) una marcada ambigüedad al no constituir ni un seguro de desempleo, ni una política asistencial, ni una política de reinserción laboral, sino todas esas características a la vez.¹⁹ Los "planes" (subsidios) y la asistencia alimentaria fueron el núcleo de la política de contención del gobierno, y se convirtieron, con el correr de los años, en el centro de la negociación con las organizaciones para poner fin a los cortes de ruta. Así, los 200.000 subsidios vigentes en 1997 eran 1.300.000 en octubre de 2002. Como ya hemos señalado, actualmente el Plan Jefas y Jefes de Hogar alcanza a más de un millón y medio de familias, mientras que el Plan Manos a la Obra y otros planes sociales llegan a 450.000 mil personas (Lozano:2005). Sin embargo, sólo cerca del 10% de estos planes sociales son directamente controlados por las organizaciones piqueteras, pues el 90% restante depende de los consejos consultivos, que registran una escasa autonomía de los poderes locales, en gran parte ligados al Partido Justicialista. En la actualidad, la política asistencial del gobierno se ha encaminado a incrementar la cantidad y el monto de los subsidios para emprendimientos productivos y para la (auto)construcción de viviendas.

La etapa fundacional del movimiento arranca entonces con la primera ola de movilizaciones, a saber, con los legendarios

cortes de ruta y puebladas de Neuquén, Salta y Jujuy, en 1996 y 1997, y se cierra en 1998, cuando se conforman orgánicamente las dos grandes corrientes sindicales del movimiento piquetero en el oeste del Conurbano Bonaerense (partido de La Matanza), en la provincia de Buenos Aires, que más adelante aportarán masividad y escala nacional a las movilizaciones. Nos referimos a la FTV y la CCC, que desde ese año y hasta fines de 2003 constituyeron un sólido bloque, caracterizado por una fuerte tendencia a negociación y a la institucionalización. En este primer periodo emergen también los llamados grupos independientes o autónomos (MTR y diferentes MTD) en el sur del Conurbano Bonaerense, los cuales, a falta de soportes, serán los más castigados en la confrontación siempre desigual con las estructuras clientelares del Partido Justicialista.

También en esta primera etapa se va consolidando un determinado vínculo con el Estado. Así, frente a los reclamos de los desocupados, el gobierno —en sus diferentes instancias—, va a alternar la represión (sobre todo en las provincias petroleras) y la criminalización de la protesta social (procesamiento de los dirigentes y manifestantes, acusados del delito de cortar rutas), con la multiplicación y focalización de sus modos de intervención territorial: subsidios financieros a cambio de una contraprestación laboral (planes sociales). La centralidad de la política asistencial generaría una fuerte dependencia de las organizaciones piqueteras en relación con el Estado, pues los planes sociales constituyen hasta el día de hoy el recurso primero y fundamental de esas organizaciones para responder a las necesidades de sus miembros y, al mismo tiempo, para dotarse de una estructura mínima que les permita actuar y desarrollarse en otros niveles.

La segunda etapa señala la entrada de las organizaciones piqueteras en la escena política nacional, en tanto actor central de las movilizaciones sociales. El convulsionado período, caracterizado por una intensa ola de protestas, arranca en 1999, en las postrimerías del segundo gobierno de Menem, y se cierra a fines de 2001, poco antes de la caída del gobierno la Alianza (1999-2001). Durante esta segunda etapa, de crecimiento y visibilidad, las organizaciones piqueteras fueron desarrollando una creciente autonomía de acción. Pero, a diferencia de los

primeros estallidos —entre 1996 y 1997—, el ciclo ascendente de 2000, 2001 y 2002 se concentraría en los espacios tradicionales de la política nacional —Capital Federal, el Conurbano bonaerense y grandes ciudades—. Esta etapa se cerraría con la realización de las dos asambleas piqueteras en el partido de La Matanza, en julio y septiembre de 2001, que para las corrientes más masivas —en ese entonces el bloque matancero, liderado por la FTV y la CCC— representaban la posibilidad de unificar el movimiento y consolidar sus liderazgos. Sin embargo, el fracaso de estas cumbres puso de manifiesto las diferencias de las organizaciones, tanto en términos de expectativas como de objetivos, dando por tierra toda posibilidad de conformar un movimiento piquetero unificado. Consolidada la fractura, a principios de diciembre de 2001, aparece en escena el Bloque Piquetero Nacional, que lideraría la oposición a las políticas del gobierno nacional, sobre todo, luego, durante el gobierno provisional de Duhalde y los primeros tiempos de la gestión de Kirchner.

La tercera etapa se abrió entonces con los sucesos de diciembre de 2001. Recordemos que las jornadas del 19 y 20 de diciembre impulsaron la apertura de un nuevo escenario político, marcado por la movilización de diferentes actores sociales. Este nuevo ciclo de movilizaciones catapultó a las organizaciones piqueteras al centro de la escena política, al tiempo que les permitió desarrollar un vínculo con otros sectores, en especial, con las clases medias movilizadas. Asimismo, dicho período se caracterizó también por la masificación de los subsidios o planes sociales, cuyo objetivo a corto plazo era el de paliar la grave situación social que atravesaba el conjunto de la población, luego de la devaluación de la moneda, y en medio de la crisis económica y el aumento del desempleo. En junio de 2002, un grave hecho de represión ocurrido en el Puente Pueyrredón, a las puertas de la ciudad de Buenos Aires, ilustraría trágicamente la centralidad política de las organizaciones piqueteras. Esos hechos, que culminaron con el asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán,²⁰ dos jóvenes piqueteros, a manos de las fuerzas represivas, conmocionaron a la sociedad argentina, generando masivas marchas de repudio. Como es sabido, este episodio tuvo como consecuencia la reorientación de la política del gobierno nacional, que debió llamar a elecciones presidenciales anticipadas.

La cuarta etapa se inicia entonces en 2003, con el gobierno de Kirchner, cuyos primeros gestos políticos contribuyeron a generar una gran expectativa de parte de amplios sectores sociales, al tiempo que impulsaron una sucesión de realineamientos dentro del diversificado espacio piquetero. De esta manera, pese a que el presidente Kirchner se encontró con un conjunto de organizaciones piqueteras muy fortalecidas, sobre todo luego del gran protagonismo que éstas asumieron a lo largo de 2002, el cambio del escenario político le otorgó un margen de acción bastante más amplio que el de los gobiernos anteriores, a partir del cual pudo desarrollar diferentes estrategias, que han venido incluyendo desde la integración de determinadas organizaciones, pasando por la división y el control, hasta el disciplinamiento y criminalización de las movilizaciones piqueteras. Por último, este escenario se complejiza si agregamos la emergencia de un espacio piquetero oficialista, conformado por grupos afines al populismo (FTV, Barrios de Pie y nuevas organizaciones, como el MTD Evita).

LA HETEROGENEIDAD DE LA EXPERIENCIA PIQUETERA

Las bases sociales de las organizaciones de desocupados están atravesadas por una triple escisión, o clivaje, a la vez social, generacional y de género. Así, en primer lugar, la heterogeneidad es social, pues si bien es cierto que los desocupados comparten ciertas condiciones de vida y experiencias comunes básicas, individualmente provienen de trayectorias y saberes muy dispares, y sus recursos culturales y simbólicos son también disímiles. En líneas generales, podríamos afirmar que, en la Argentina, la experiencia de la descolectivización se sitúa entonces entre dos extremos: ésta puede ser de larga data, esto es, estar en el origen de una trayectoria por momentos errática, signada por la precariedad y la inestabilidad (alternancia de períodos de empleo —formal o precario— con períodos de desempleo); o bien, la experiencia más reciente, estar asociada a una carrera laboral más estable que se interrumpe abruptamente. De todos modos, tanto desde una perspectiva de corto como de mediano plazo, la erosión de los tradicionales marcos sociales y cultura-

les que estructuraron el mundo obrero industrial, marcado por la experiencia de la integración a la vez política (la identidad peronista), económica (el acceso al consumo) y social (los derechos sociales, protección social, estabilidad laboral) devino inevitable.

En segundo lugar, existe un clivaje de género; más de la mitad de los adherentes y militantes de las organizaciones piqueteras son mujeres, y sobre ellas reposa gran parte de la organización administrativa y laboral, así como la tarea de contención afectiva y psicológica. Sin embargo, pese al protagonismo innegable que han asumido desde el principio, son muy pocas las mujeres que en la actualidad aparecen como las voceras de los movimientos. Esto no se debe solamente a los rasgos patriarcales del mundo popular, sino también al hecho de que son los hombres los que reenvían a una historia militante (que puede provenir del campo sindical o político), mientras que las mujeres más maduras y destacadas suelen contar con una experiencia organizativa más anclada en el espacio barrial, en tanto "militantes sociales", en ciertos casos ligadas anteriormente al Partido Justicialista. Sin embargo, esto no significa que las mujeres no asuman importantes responsabilidades en el interior de las organizaciones. En tercer lugar, hay que tener en cuenta que los jóvenes constituyen una parte importante (cerca del 70%) de las bases sociales de las organizaciones. En un fuerte contexto de crisis económica, los jóvenes (hombres y mujeres) son el objeto de una triple exclusión: la mayor parte de ellos han tenido escaso contacto con las instituciones educativas y políticas; sufren frecuentemente el acoso y, en el límite, la represión de las fuerzas de seguridad; por último, la mayoría no ha pasado por experiencia laboral alguna, lo cual explica la escasa presencia de una cultura tradicional del trabajo. En consecuencia, las organizaciones piqueteras se ven obligadas a proponer otros lugares de producción de la disciplina y la solidaridad; por un lado, el trabajo comunitario, ligado muy estrechamente a la satisfacción de las necesidades más inmediatas (huertas comunitarias, comedores, panaderías, entre otros), por el otro, la experiencia asamblearia. Pero el barrio no es el único lugar de producción identitaria, sino también la acción colectiva, tan-

to en la ruta como —en los últimos años— las movilizaciones en las calles y espacios públicos de la ciudad de Buenos Aires y las capitales de provincia.

LOS REPERTORIOS COMUNES DE LA EXPERIENCIA PIQUETERA

Más allá de las diferencias políticas o de la heterogeneidad social, la experiencia piquetera ha ido definiendo un repertorio común, a saber, nuevas formas de acción y organización colectivas: en primer lugar, la acción directa, ligada al piquete o corte de ruta; en segundo lugar, el funcionamiento asambleario, que incluye referencias a la pueblada; por último, el trabajo territorial, desarrollado a partir de la instalación de una demanda y la institucionalización de los planes sociales.

Riquezas y ambigüedades de la acción directa

Desde un comienzo, los piquetes —los cortes de ruta— fueron la forma central en la cual los reclamos de distintos sectores sociales afectados por el proceso de desestructuración económica adquirieron visibilidad. En un principio, los piquetes eran multisectoriales (como lo ilustran los primeros cortes en el interior del país), pero estuvieron indisociablemente ligados a los reclamos de los desocupados, configurando sin duda uno de los ejes centrales de la historia piquetera.

En tanto metodología de acción directa de ocupación del espacio público, el piquete puede tomar un carácter parcial o total, puede expresarse mediante el bloqueo a una empresa (“corte de acceso”, como sucede en las zonas petroleras) o puede tomar la forma de un “acampe” frente a oficinas gubernamentales (como sucede en las ciudades), seguido de una toma o ocupación. Más aún, a partir del año 2002, el piquete, en tanto formato modular, fue desplazándose hacia formas más clásicas de la movilización colectiva (marchas y ocupaciones de calles).

Sin embargo, lo propio del piquete es haber establecido un nuevo umbral de significación del conflicto social, en donde se expresaban y convergían la desocupación extrema y el hambre.

En este sentido, la participación de las mujeres en los piquetes fue fundamental, como la expresión más auténtica e incuestionable de una situación de emergencia familiar y social. Así, las mujeres —en su mayoría acompañadas por sus hijos—, no sólo se encontraron en el centro de la nueva protesta (siendo las “pioneras”, junto con militantes y ex delegados sindicales), sino que —como ya había sucedido con las Madres de Plaza de Mayo (y, en otra escala, con las Mujeres Agropecuarias en Lucha)— en tanto vehículo “desideologizado”, contribuyeron de manera crucial a politizar los reclamos, basándolos en el hambre y la desocupación.

Ciertamente, la “nueva política de los cuerpos” (Pérez:2001) instaló las demandas en una dimensión material —el hambre, la urgencia de las necesidades básicas—, conjugada con otros temas altamente disruptivos —la desocupación masiva y la exclusión—. Esto explica su carácter altamente movilizador y por momentos irreductible, así como las resonancias ambiguas que su alta visibilidad —y más allá de la molestia objetiva— produce en diferentes sectores de la población. En realidad, en su carácter radical, el piquete tiende a poner de relieve la irracionalidad del actual modelo de acumulación, que demanda el sacrificio de una mayoría en nombre de la inclusión de una minoría. Desde adentro, el piquete tiende a configurarse como el lugar de producción de una identidad positiva; desde afuera, tiende a aparecer como el espacio de producción de una alteridad amenazante, que da cuenta de la existencia de “otros mundos”, cuya proximidad se advierte como peligrosa, sobre todo en contextos de alta inestabilidad y movilidad social descendente como el que atraviesa la Argentina.

En los últimos años, la reiteración del piquete como metodología de acción, por un lado, y la institucionalización de los planes sociales, como demanda, por el otro, han contribuido a la construcción de estereotipos negativos sobre los cuales se han deslizado las lecturas reduccionistas y unilaterales del fenómeno piquetero, que tienden a ignorar las otras dimensiones —menos visibles y por ende menos espectaculares— de la acción colectiva (como el trabajo comunitario en los barrios).

Inflexión asamblearia y prácticas políticas

Desde el origen, las organizaciones piqueteras desarrollaron una fuerte impronta asamblearia. Dicha dinámica posee una inflexión ordinaria y otra mítica o extraordinaria. La expresión más ordinaria está asociada al desarrollo de prácticas de democracia directa, visible tanto en los diferentes niveles organizativos (local, regional, nacional), como en los diversos espacios de acción (la organización y vida cotidiana en el barrio, los piquetes y las movilizaciones). Sin embargo, el tipo y el grado de cristalización del modelo asambleario en los distintos espacios de acción está relacionado directamente con la lógica de construcción política de cada corriente. Así, las variantes existentes son numerosas, pues están desde aquellas corrientes que colocan el modelo asambleario en el centro de la práctica política (entre ellos, los grupos independientes —MTR, MTD, aunque también la CCC), y apuntan a profundizar las formas de la democracia directa; aquellas otras que insertan el formato asambleario dentro de modelos tradicionales de liderazgo, más bien de tipo movimientista (MIJD, FTV); finalmente, aquellas que tienden a limitar la potencialidad de la dinámica asamblearia a través de la creación de estructuras centralizadas de autoridad, en muchos casos, dependiente de los partidos políticos (PO, MTL, MST).

La dinámica asamblearia es, desde varios puntos de vista, un lugar de potenciación de la política: ella apunta a instaurar un espacio de deliberación y de toma de decisiones más democrático y participativo, contribuye a formular un sentido más colectivo de lo político y posibilita una reconstrucción de la identidad individual mediante la revaloración de las competencias y las experiencias, tan castigadas por el proceso de descolectivización que está en la base de la desocupación y la precarización laboral. Por otro lado, la real potencialidad de las prácticas de democracia directa depende, en mucho, del tamaño de las organizaciones. En la medida en que éstas se constituyen en actores masivos, el esfuerzo por mantener una dinámica asamblearia que conjugue horizontalidad y diversidad de competencias se torna más complejo y aleatorio; y ello, más allá del esfuerzo que cada una de las corrientes realice por crear instancias de coordinación o de centralización organizativa.

Autoorganización colectiva y trabajo territorial

Como hemos dicho, a partir de 1996, los piqueteros abrieron una brecha en el mundo descolectivizado de los sectores populares, al crear redes de solidaridad, mediante la movilización y la autoorganización colectiva. Poco a poco, pese al déficit comunitario, la autoorganización de lo social abrió las puertas a nuevas experiencias, asociadas a la autogestión comunitaria. El punto de partida de esta experiencia de "recolectivización" fue la resignificación de los planes sociales. Esto sucedió a partir de 1999, cuando las organizaciones piqueteras lograron el control directo de los planes sociales, y pudieron orientar así la contraprestación exigida (cuatro horas diarias de trabajo) hacia el trabajo comunitario en los barrios. Luego de ello, se comenzó a discutir un problema fundamental relativo a los planes sociales: ¿qué se entiende en este contexto por trabajo "genuino"? La respuesta a esta gran pregunta pondría al descubierto, desde otro punto de vista, las grandes diferencias que aún en términos estratégicos recorren a las organizaciones piqueteras.

En el interior del país, la distribución masiva de planes permitió hacer frente a situaciones de desprotección total. Sin embargo, en varios casos los planes fueron recibidos como salarios y la obligación de desarrollar una contraprestación laboral fue rápidamente asumida. Así, se produjeron situaciones paradójicas, pues fueron las propias organizaciones las que crearon los marcos necesarios para poder llevar adelante los proyectos, dando origen a verdaderas experiencias de autogestión. La experiencia de la UTD de Mosconi, en Salta, es un modelo de autogestión comunitaria, que ha tenido una importante repercusión en otras organizaciones independientes. Asimismo, el desarrollo de ciertos proyectos —específicamente de huertas comunitarias y panaderías— se orientó a la (re)construcción de minieconomías de subsistencia que permitieron hacer frente a las situaciones de hambre.

Por otro lado, en las líneas nacionales, la inclusión de los planes sociales en las lógicas de construcción política fue menos una decisión de las organizaciones que un producto de la

presión de las bases frente a los contextos de urgencia y necesidad. Sin embargo, su aceptación supuso que implícita o explícitamente cada una de las organizaciones se diera debates o tomara decisiones respecto de sus formas organizativas, de las claves de sus inscripciones territoriales y, fundamentalmente, de la manera en que se retematizaba la noción de trabajo. Cier to es que, para gran parte de las organizaciones, la fuerte herencia de la sociedad salarial —en su impronta fabril— marca todavía la concepción de lo que se entiende por “trabajo genuino” y el horizonte de su reconstrucción. Así, la experiencia de la autogestión aparece asociada de manera natural a la esfera de la fábrica, pero no necesariamente al impulso de una economía social alternativa. En realidad, han sido sobre todo las organizaciones independientes las que se han reapropiado de los planes sociales, integrándolos a sus propios proyectos de construcción política. De esta manera, la resignificación de los planes sociales forman parte de una estrategia mayor, la de crear nuevos lazos culturales y sociales dentro del mundo popular, con vistas al desarrollo de formas de economía alternativa y solidaria.²¹

Por último, hay que tener en cuenta que para todas las organizaciones piqueteras los planes asistencial-laborales representan una condición de posibilidad de su existencia. Esto se explica porque históricamente todos los cortes de ruta fueron negociados a cambio de “paquetes de planes” provinciales o nacionales, o en algunos casos, contra la entrega de mercadería. Así, los planes significaron una solución de compromiso, una especie de débil equilibrio logrado en el contexto de la necesidad y de una importante debilidad relativa. En la medida en que la movilización fue cada vez más masiva y recurrente, durante la segunda mitad de los 90 algunos grupos lograron consolidar volúmenes importantes de planes. Por otro lado, las organizaciones —sobre todo, sus bases— comenzaron a percibirlos como derechos adquiridos, antes que como prestaciones asistenciales.

Sin embargo, luego de la crisis de diciembre de 2001, con la masificación de los planes asistenciales se registraron cambios importantes. No olvidemos que los planes sociales aumentaron de 300 mil o 700 mil (según los gobiernos) a casi dos mi-

lones. Aunque resulte paradójico, la gran crisis otorgó al peronismo una nueva oportunidad histórica, pues le permitió, a través de la masificación de los planes asistenciales, recomponer las relaciones con los sectores populares y recuperar parte del espacio organizativo, que en los últimos años habían ocupado las movilizadas agrupaciones piqueteras. Ciertamente, resulta difícil minimizar el impacto que ha tenido la nueva política social implementada en el empobrecido mundo popular, pues en un nuevo contexto de masificación, los dispositivos del clientelismo afectivo se potenciaron y, a la vez, se transformaron, asegurando así la posibilidad de la reproducción del peronismo "desde abajo".

En resumen, la política iniciada en 2002 conllevó un fortalecimiento de la matriz asistencial del modelo neoliberal. Por su carácter masivo, la introducción de este nuevo plan social —en su tipo, el de mayor envergadura en América Latina—, produjo una inflexión importante dentro del mundo organizacional de los pobres urbanos. Es cierto que, a corto plazo, el objetivo del Plan Jefas y Jefes de Hogar era doble: por un lado, paliar la grave situación de urgencia y necesidad social que atravesaba una parte importante de la población; por el otro, contener la agravación del conflicto social, frente a los reclamos cada vez mayores del conjunto de las organizaciones piqueteras. Desde la perspectiva del gobierno, una de las consecuencias "indeseadas" de esta política era así la expansión del volumen de adherentes dentro de las organizaciones piqueteras, a través de la multiplicación de planes y ayuda alimentaria. Sin embargo, a mediano plazo, uno de los objetivos deliberados de esta política de masificación de los planes sociales era recomponer los históricos y deteriorados lazos del Partido Justicialista con los sectores populares.

Por último, la experiencia de la masificación trajo aparejado también un peligro importante para las organizaciones piqueteras. No olvidemos que, en sus orígenes, el desarrollo del movimiento piquetero estuvo acompañado por la generalización de la crítica y el cuestionamiento al sistema clientelar peronista. Así, a contracorriente de lo profetizado por voceros de diferentes partidos de izquierda, la emergencia de nuevas organizaciones y prácticas políticas demostró que la resignifica-

ción de los planes sociales era posible, lo cual fue un claro signo de que los riesgos de caer en "la trampa asistencialista del Estado" podían eludirse. En consecuencia, en la medida en que se profundizaba la distancia entre las organizaciones piqueteras y las formas de representación del peronismo político y sindical, los riesgos permanecieron latentes. Sin embargo, con la masificación de los planes sociales a partir de 2002, dichos riesgos comenzaron a hacerse manifiestos, a causa del nuevo impulso que cobró la figura del mediador dentro de la matriz territorial. Así, la actual política asistencial conllevó distorsiones que afectaron no sólo a la tradicional estructura punteril peronista, sino también a las propias organizaciones piqueteras, que, sumergidas de lleno en la política asistencial, hoy ven acentuadas su relación de dependencia con respecto al Estado y exacerbados los problemas referidos a la consolidación de las nuevas prácticas políticas.²²

ESTADO, POLÍTICA Y MOVIMIENTOS PIQUETEROS

Como en otros países, en la Argentina la implementación de un modelo neoliberal se tradujo en el aumento de las desigualdades, la concentración económica y la exclusión de vastos sectores de la población. Este modelo de sociedad excluyente se ha venido sosteniendo sobre dos ejes fundamentales: por un lado, el Estado fue desarrollando estrategias de contención de la pobreza, por la vía de la distribución —cada vez más masiva— de planes sociales y de asistencia alimentaria a las poblaciones afectadas y movilizadas; por el otro, el Estado se encaminó a reforzar el sistema represivo institucional, apuntando al control de las poblaciones pobres y a la represión y criminalización del conflicto social.

De esta manera, las relaciones entre los sucesivos gobiernos y los movimientos piqueteros no han recorrido un carril único. Más bien, desde el comienzo éstas han venido combinando diferentes estrategias, que alternan la negociación y la cooptación, con dosis importantes de control, disciplinamiento y represión. Por un lado, los mecanismos de negociación fueron institucionalizándose mediante la distribución de paquetes de planes socia-

les y ayuda alimentaria y, más recientemente, de herramientas y subsidios para los proyectos productivos. La negociación, a su vez, fue acompañada por el endurecimiento del contexto represivo —propio de la matriz neoliberal—, visible en los numerosos episodios de represión a lo largo de la historia del movimiento piquetero. En efecto, la vertiginosa pérdida de derechos (sociales, laborales) fue acompañada por el aumento y pertrechamiento de las fuerzas represivas (Policía Federal, Provincial, Gendarmería nacional y Prefectura). El ejemplo más elocuente es el de Gendarmería Nacional, que pasó del cuidado de las fronteras al control y represión de los conflictos sociales provinciales, desde 1993 en adelante. Por ejemplo, la localidad salteña de General Mosconi estuvo literalmente sitiada por la Gendarmería entre mayo de 2000 y diciembre de 2001. La violencia de Estado se concretó en fuertes situaciones de represión que culminaron en asesinatos, que arrancaron en Cutral-Co (abril de 1997), Corrientes (diciembre de 1999), General Mosconi (diciembre de 2000, junio de 2001), Buenos Aires (diciembre de 2001, junio de 2002) y, más recientemente, en Jujuy (Ledesma, octubre de 2003). A su vez, desde 1996 en adelante, dichas estrategias han sido convenientemente acompañadas por una sostenida política de judicialización del conflicto social, tanto en el nivel nacional como en las respectivas jurisdicciones provinciales, que hoy se traduce en más de 4000 procesamientos, entre dirigentes y militantes.²³

La hipótesis de la integración e institucionalización comenzó a perfilarse como una tendencia importante a partir del gobierno de Kirchner, alimentada por el accionar de ciertas organizaciones sociales que vieron en el nuevo presidente la posibilidad de un retorno a las “fuentes históricas” del justicialismo. Por último, a la integración e institucionalización hay que sumar la estrategia de control y disciplinamiento, dirigida sobre todo hacia los grupos más movilizados: los que componen el Bloque Piquetero Nacional, CCC, el MILD y las organizaciones independientes (MTR, MTD Aníbal Verón, Frente Darío Santillán, UTD de Mosconi), entre otros.

La política del actual presidente, Kirchner, consistió en poner en acto, simultáneamente, el abanico de estrategias disponibles para integrar, cooptar, disciplinar y/o aislar al conjunto del movimiento piquetero, discriminando entre las diferentes

corrientes y organizaciones. El balance que puede hacerse de sus dos primeros años de gestión indica que dichas estrategias han sido "exitosas", tanto en términos de integración e institucionalización de las corrientes afines, como de aislamiento de las corrientes opositoras. Para ello, el gobierno se apoyó en el estado de la opinión pública, fuertemente apuntalado por los grandes medios de comunicación, que no vacilaron en realizar una verdadera cruzada antipiquetera, teñida de un claro maniqueísmo cuando no de una antigua retórica sarmientina, que alienta la reactivación del fantasma de la barbarie (las clases peligrosas). En ese sentido, pese a su promesa de "no reprimir", el gobierno nacional impulsó la estigmatización de la protesta —contraponiendo la movilización callejera a la exigencia de "normalidad institucional"—, al tiempo que promovió la difusión de una imagen de la democracia, supuestamente "acosa-da" por las agrupaciones piqueteras. Sin embargo, en 2004, a partir de los hechos acaecidos en torno a la discusión del Código Contravencional de la ciudad de Buenos Aires, ocurridos el 16 de julio, se registró un giro importante en la política del gobierno, visible en la sistemática judicialización y agravamiento de las figuras penales impuestas a las y los detenidos, así como en el accionar de las fuerzas represivas en diferentes situaciones y contextos. (Gendarmería Nacional, grupos especiales, Policía Federal y policías provinciales)

Como veremos en el próximo capítulo, el resultado de esta pulseada política, que tuvo como escenario privilegiado la ciudad de Buenos Aires, fue tal, que hoy podemos afirmar que existe en la Argentina un peligroso consenso negativo contra las organizaciones piqueteras, que tiende a avalar sin cuestionamientos la criminalización del reclamo (agravamiento de las imputaciones penales infligidas a los manifestantes y encarcelamiento de manifestantes, que en marzo de 2005 alcanzaban la veintena), así como a soslayar la existencia de episodios represivos, desplegados en distintas situaciones y lugares, a partir de agosto de 2004.

Ahora bien, no es posible dejar de lado la contribución de los movimientos piqueteros a esta situación de aislamiento y deslegitimación. Para comenzar, el cambio de escenario político produjo un realineamiento de las organizaciones, así

como potenció el proceso de fragmentación organizacional. En realidad, el cambio en las oportunidades políticas, los diagnósticos y sucesivos realineamientos que produjo en el interior del espacio piquetero, terminaron por actualizar y poner en evidencia las diferentes matrices ideológicas de los movimientos. En función de ello, es posible diferenciar tres configuraciones mayores: las agrupaciones filopopulistas, las organizaciones ligadas a los partidos de izquierda y, por último, lo que podemos denominar como el espacio independiente de las nuevas izquierdas.

El primer realineamiento abarca a las agrupaciones de matriz nacional-popular,²⁴ las cuales desarrollaron una fuerte expectativa (re)integracionista, apostando a la reconstrucción del Estado nacional, desde un nuevo liderazgo, encarnado por el presidente Kirchner. Esta ala del movimiento piquetero se apoya en el clima ideológico que recorre el continente y alienta la idea de conformar un polo latinoamericano, que incluye experiencias como la de Chávez en Venezuela, Lula en Brasil, Kirchner en la Argentina, el Frente Amplio en Uruguay y, eventualmente, el líder del Movimiento al Socialismo (MAS) Evo Morales en Bolivia. Entre estas organizaciones se encuentran la FTV, así como la organización Barrios de Pie y grupos de reciente creación, tal el MTD Évita, que conformaron un frente piquetero oficialista. Dichos grupos no sólo sobreestimaron la capacidad innovadora del nuevo gobierno, sino que terminaron por resignar su autonomía, como lo muestra la subordinación fiel a las consignas —movilizadoras o desmovilizadoras— que imparte el gobierno.

Un segundo posicionamiento aparece ilustrado por las organizaciones ligadas a los partidos de izquierda (que incluyen sobre todo las diferentes variantes del trotskismo, además de una agrupación independiente, de estilo personalista y movimientista, como el MIPD), que impulsaron una lectura del gobierno de Kirchner en términos de continuidad con los anteriores (“más de lo mismo”), mostrando con ello serias dificultades para reconocer el cambio de oportunidades políticas. Esto condujo a que dichas organizaciones actualizaran hasta el paroxismo una estrategia centrada en la movilización callejera, como eje prioritario de la construcción y concientización política, cuyas consecuencias a mediano plazo se tornaron negativas tanto

en términos de capacidad de presión (hacia el gobierno), como de movilización (el desgaste inevitable de las bases sociales). En el límite, los partidos de izquierda dieron muestras de un dogmatismo ideológico y una creciente instrumentalización partidaria, que contribuyó activamente a cuestionar parte del capital político y simbólico del movimiento piquetero.²⁵

Por último, dentro del espacio piquetero se destaca una tercera posición, suerte de nueva izquierda anticapitalista que, representada por diferentes organizaciones independientes, comprende un arco ideológico que va del guevarismo, la izquierda radical, hasta las formas más extremas del autonomismo. En este espacio heterogéneo, en el cual se encuentran muchas de las organizaciones históricas más innovadoras (como el Movimiento Teresa Rodríguez, y el Frente Darío Santillán, entre otros), los movimientos desarrollaron una acción más defensiva, buscando no caer en la lógica de acción política que proponía el gobierno. Al mismo tiempo, pese a sus divisiones internas, tendieron a privilegiar la problemática barrial, orientada hacia la creación de ámbitos de formación política y esferas de producción de nuevas relaciones sociales.

Así, pese a los logros efectivamente realizados en términos de autoorganización de los sectores populares, las actuales dificultades de las organizaciones piqueteras son numerosas y complejas. Entre otras, la fragilidad de las instancias de coordinación política, en un contexto de fragmentación del espacio piquetero; hoy compuesto por más de un centenar de organizaciones. Sin embargo, a la luz de los hechos acontecidos durante 2005, la coordinación entre los grupos constituye una condición necesaria, aunque no suficiente, para romper el cerco informativo e interpretativo, y menos aún, el "sentido común negativo" que se ha instalado en torno del fenómeno piquetero (que involucra la totalidad del arco piquetero, incluidas las corrientes oficialistas), en un creciente marco de aceptación de las distancias sociales instaladas en los 90 y, por ende, de desdibujamiento de las demandas de la ciudadanía.

No olvidemos, por otro lado, que los logros de las organizaciones piqueteras, en términos de autoorganización de los sectores populares, han sido significativos. Muchas agrupaciones han avanzado hacia experiencias de autogestión, que incluyen

desde la pequeña producción (talleres, panaderías, huertas), hasta la alfabetización y la salud. Asimismo, la apelación a formas de democracia directa viene impulsando no sólo la democratización de las relaciones sociales (y de género), sino que ha tenido una clara influencia en otras experiencias de autoorganización (asambleas barriales, fábricas recuperadas por los trabajadores). Sin embargo, estas dimensiones de la experiencia piquetera, menos "espectaculares" que la acción callejera, tienden a ser minimizadas por los medios de comunicación y, en gran medida, ignoradas por la opinión pública.

* * *

Cierto es que las organizaciones piqueteras contienen una fuerte presencia de componentes pragmáticos, que por momentos parece vincularlas más a una dinámica acorde a un "movimiento social urbano", de tipo reivindicativo, que a aquella propia de un movimiento social antagónico, portador de nuevas orientaciones socioculturales o un contraproyecto social. En realidad, la gran problemática no es precisamente la creación de nuevas formas de organización y relaciones sociales (pues hay que decir que en este plano la Argentina ha dado grandes muestras de creatividad en los últimos años), sino, sobre todo, la consolidación de estas nuevas prácticas políticas, en un contexto atravesado por la figura del militante social, por la multiplicación de demandas clientelares, en fin, por visiones instrumentales de la política.

Pese a ello, a partir de grandes dificultades y en medio del aislamiento y de la estigmatización, de límites coyunturales y/o estructurales, existen movimientos que en una lucha desigual, día a día, entre la ruta y el barrio, continúan generando prácticas novedosas y disruptivas, nuevas formas de reapropiación del territorio, de subjetivación y de recreación de los lazos sociales. Esto se refleja sobre todo en las organizaciones que se destacan por la trayectoria y solidez de sus núcleos históricos, así como también en aquellas que, aun siendo más recientes y en medio de las dificultades actuales, hacen hincapié en estilos de construcción democráticos, procurando dinamizar y multiplicar el trabajo en los barrios. Así, con todas sus dificultades y logros,

sus ambivalencias y complejidades, las organizaciones piqueteras continúan representando esa parte todavía no resignada de un mundo popular, cada vez más sumergido en la naturalización de las desigualdades sociales.